

**SENTENCIA 1954/2011, DE 13 DE ABRIL DE 2011
(REC.5829/2006) DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL
TRIBUNAL SUPREMO**

Fundamentos

PRIMERO.- La representación procesal de D. ^a Angustias interpone recurso de casación frente a la *sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de quince de septiembre de dos mil seis, pronunciada en el recurso contencioso administrativo número 162/2005*, y que rechazó el mismo deducido contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada el 1 de septiembre de 2004 por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia.

SEGUNDO.- En los fundamentos segundo y tercero la sentencia de instancia expone las pretensiones que dedujo la demandante, así como sus alegaciones y los artículos que invocó para mantener su reclamación, y la respuesta a todo ello de la Administración demandada, y a tal fin expresó que: "La recurrente solicita que se condene al Ministerio de Justicia a indemnizarle en 380.000 Euros por los daños morales sufridos como consecuencia de la Resolución del Juzgado de Instrucción nº 13 de Valencia al inadmitir la querella que presentó, alegando hechos no fundamentales, faltando la motivación necesaria y basada en documentos privados de aquélla no pertenecientes al supuesto que se debería enjuiciar, así como al abono de intereses desde la interposición del presente recurso contencioso.

En defensa de su pretensión alega que el 2 de Enero de 2.001 interpuso querella criminal de la que conoció el mencionado Juzgado de Valencia por un delito de lesiones con imprudencia profesional y el 11 de Octubre del mismo año el Juzgado dictó auto de inadmisión de la querella, sin practicar ninguna de las pruebas propuestas por la querellante, basándose la inadmisión en su "personalidad querulante"; los recursos contra dicho *auto, así como el incidente de nulidad promovido fueron rechazados y la demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional inadmitida el 20 de Enero de 2.005.*

Invoca los *arts. 121 de la Constitución y 292 a 297 LOPJ* entiende que el Auto de inadmisión de la querella se basa en la documental aportada por ella pero no entra en el fondo para inadmitir, sino que lo hace por el motivo indicado, con lo que altera los hechos y la causa de pedir, lo que constituye una irregularidad procesal que ha vulnerado su derecho a la tutela judicial; el daño consiste en la falta de pronunciamiento sobre su pretensión, además del daño moral por calificarla de personalidad querulante, lo que vulnera su derecho al honor e intimidad, todo lo cual valora en la cantidad que reclama, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, morales y personales.

La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que no existe funcionamiento anormal, como se aprecia en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, por lo cual solicita que se desestime el recurso y se confirme el acto impugnado".

El fundamento cuarto efectúa una exposición de la normativa constitucional y de la legislación ordinaria que regula el cauce de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de

Justicia, y para ello explica que "Se ejercita en el presente recurso acción para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, con la fundamentación jurídica acabada de exponer.

El *art. 121* de la Constitución contiene una norma específica sobre responsabilidad del Estado cuando el daño resulta del funcionamiento de la Administración de Justicia, frente a la general establecida en el *art. 106.2. CE*, y limita la posibilidad de reclamar indemnización a la existencia de error judicial o funcionamiento anormal, en los términos que la ley establezca; el desarrollo de esta previsión *constitucional se contiene en los arts. 292 a 297 LOPJ* que establecen que, en los supuestos de error, éste ha de ser previamente declarado por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo en la forma prevista por el *art. 293 de dicha Ley* es distinto del funcionamiento anormal que, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, comprende cualquier defecto en la actuación de los juzgados y tribunales, concebidos como complejo orgánico en el que se integran diversas personas, servicios, medios y actividades".

Y cierra la cuestión planteada en el fundamento quinto en el que sostiene que: "La aplicación de la anterior regulación, y de la jurisprudencia que la interpreta, determina la desestimación de la demanda, ya que no se aprecia la existencia de anomalía alguna en el funcionamiento del Juzgado de Instrucción de Valencia que, mediante un Auto detalladamente motivado, acordó inadmitir la querella presentada por la ahora recurrente sin que el fundamento de la resolución descansa en un rasgo de la personalidad de la querellante, sino en las razones jurídicas que expone el Juzgado, confirmadas en posteriores resoluciones, por lo que no puede hablarse ni de falta de motivación ni de denegación de tutela por falta de pronunciamiento sobre la pretensión ya que este derecho fundamental se satisface con la existencia de un pronunciamiento fundado en derecho, según conocida y reiterada doctrina del Tribunal Constitucional de innecesaria cita, ni, desde luego, es de apreciar funcionamiento anormal alguno en el órgano judicial, como apreció el Consejo General del Poder Judicial en su informe, en que no observa en las actuaciones sino un correcto ejercicio de la función jurisdiccional, por lo que al faltar el presupuesto de la reclamación, ésta no puede prosperar".

TERCERO.- El recurso contiene un único motivo de casación al amparo del apartado d) del *número 1 del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción* o "infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate". Y denuncia el motivo la infracción de los *artículos 292 a 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio*, así como la jurisprudencia que cita.

Afirma el motivo que "En el supuesto que nos ocupa, el auto de inadmisión a trámite de la querella interpuesta por mi representada, fundamentando la misma en una serie de documentos privados, en concreto 750 folios de documental, incorporados desconocemos cómo a dicho procedimiento, y con una única conclusión final y es la derivada de la posible personalidad querulante de la señora Angustias que es lo que fundamenta la decisión de no admitir a trámite dicha querella.

También según el motivo la sentencia que se recurre en casación dice en su fundamento de derecho quinto, que no se ha tenido en cuenta por la misma la personalidad querulante con la (sic) dicho Juzgado calificó a la Sra. Angustias, pero de la lectura del Auto vemos que si le dedica una gran parte del Razonamiento Jurídico

quinto a dicha personalidad.

La respuesta judicial y los motivos para admitir o inadmitir la querrela han de basarse en lo solicitado en la misma, dando respuesta motivada a los razonamientos que llevan al juzgador a dicha resolución, pero "nunca" ha de basarse, como es el caso que nos atañe, en decisiones absurdas y faltas de toda lógica, basadas en prueba sin constancia en los autos, con aportaciones extraprocesales y omitiendo pruebas trascendentes solicitadas por la parte actora, que clarificarían el fondo del asunto y que han sido indebidamente omitidas dando lugar a una resolución infundada alterando los hechos y la causa de pedir.

En este sentido se pronuncia la *Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1998*, que en su Fundamento de Derecho Primero establece que: "...esta acción se reserva solamente para los supuestos de decisiones injustificables desde el punto de vista del Derecho, para equivocaciones patentes, manifiestas y palmarias en la fijación de los hechos, o en la interpretación o aplicación de la ley, generantes de una resolución esperpéntica y absurda, que rompa la armonía del orden jurídico, de forma que el órgano jurisdiccional haya actuado abiertamente fuera de los cauces legales, sin que puedan ser objeto de debate y ataque las conclusiones que no resultan ilógicas o entendidas o entendidas fuera de su sentido o alcance, hasta el punto de que en el ámbito de este proceso no cabe combatir las interpretaciones que, acertada o equivocadamente, obedezcan a un proceso lógico que lleve a una convicción psicológica incluso equivocada, pues que no es el desacierto lo que trata de corregir el error judicial, sino la desatención, la desidia o la falta de interés jurídico, conceptos introductores de un factor de desorden que es el que origina el deber, a cargo del Estado, de indemnizar los daños causados directamente, sin necesidad de que sea declarada la culpabilidad del Juzgador (*SS. 1 marzo, 24 abril y 11 septiembre 1996*(...), entre muchas otras".

Antes del auto de inadmisión de la querrela, no consta ni siquiera que se haya realizado el trámite previo de dar traslado de la misma al Ministerio fiscal para que alegue lo que considere conveniente sobre su continuación o no, por lo tanto, se han producido irregularidades procesales que han vulnerado su derecho a la Tutela Judicial Efectiva y le han causado indefensión.

Las infracciones procesales, como ya expresamos en la demanda que ha dado lugar a la Sentencia que recurrimos en Casación, se concretan, en las siguientes:

- Se han incluido en el procedimiento documentos privados de la querrelada que no habían sido solicitados por ninguna de las partes, y de cuya inclusión no se ha notificado a la representación procesal de la misma para realizar las alegaciones que a su derecho convinieran, vulnerando así el derecho de defensa y por tanto el derecho a la tutela Judicial efectiva.

- Faltando a toda lógica, se han realizado acciones incardinadas a la investigación de la querellante y no de los querrelados no dando así una respuesta fundada a las pretensiones de la misma.

- Falta de motivación del Auto de inadmisión en tanto en cuanto no justifica el por qué de dicho proceder al incluir esos documentos, ni de que modo se ha realizado, ni la necesidad jurídica de solicitar datos particulares de la querrelada obviando el petitum de la querrela. Ni se justifica razonable y motivadamente la razón

de dicho giro procesal fuera anormal en cualquier procedimiento y fuera de toda lógica.

Si bien es cierto que el objeto de la investigación de un órgano instructor no es otro que averiguar la verdad de los hechos, lo cierto es que en este supuesto, el hecho de un posible informe médico, de los muchos contradictorios que existen en el expediente en cuanto a la patología que se le atribuye a mi representada, a la cual ninguno de esos informes le ha dado un nombre, sino que todos se refieren a un trastorno de la personalidad de etiología no filiada.

Es evidente que la juzgadora basa única y exclusivamente su auto en la posible personalidad querulante de mi representada, la cual no ha sido diagnosticada por alguno de los facultativos que figuran en el auto dado que el informe que la menciona, continua en el fundamento tercero diciendo que la reconocida se encuentra dentro de la normalidad, "y que en todo caso, para que merme su capacidad de reclamar ante los tribunales, ha de estar ligada a una incapacidad por la misma, incapacidad que no existe y por lo tanto no es óbice para que la juzgadora de motu proprio, lo acoja como motivo para no admitir la querella, privando a mi representada del derecho fundamental que le asiste como cualquier ciudadano, a acudir a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos. De hecho, de las reclamaciones que ha interpuesto mi representada ante los tribunales de justicia, ha obtenido resoluciones favorables a sus intereses en numerosas de ellas, lo que tampoco ha sido reflejado por el juzgador en el auto, ya que si bien, no son hechos relacionados con la querella, tampoco lo son los documentos que el juzgador ha solicitado y en los que basa la misma, ni siquiera el que la Sra. Angustias tenga o no otras reclamaciones en diferentes procedimientos. Esta no es la cuestión que ocupa el procedimiento de la querella, no entra en el fondo del asunto, ni ha de ser alegado por el juzgador en la resolución final para inadmitir dicha querella, sino que ha de basarse en motivos de fondo sobre el petitum de la misma, de no realizarlo así se estaría vulnerando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española en cuanto a obtener una resolución basada en derecho, motivada y resolviendo sobre lo que en la querella se solícita, no sobre hechos ajenos a la misma.

Así pues, el daño indemnizable es el que sea consecuencia directa del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, lo que en este supuesto se centra en la falta de pronunciamiento sobre la pretensión que se accionó, y en los daños morales irrogados a mi representada inadmitiendo una demanda por considerar la personalidad querulante de la querellada, (sic) cuestión que ni ha sido acreditada, ni era objeto de la querella.

La lesión que se le ha causado es la vulneración de su derecho al honor e intimidad y daños morales suficientemente acreditados por el auto que trae origen del presente procedimiento, y por lo recursos preceptivos interpuestos contra el mismo, que no entrando a valorar el fondo del asunto, se limitan a aprobar las conclusiones a las que ha llegado el juzgador de instancia, no habiéndose satisfecho el derecho del recurrente a obtener pronunciamiento judicial de fondo en la vía penal, imponiendo al reclamante la carga de, en caso de estimarlo procedente, tener que acudir a otra vía para la obtención de una reparación económica que en ningún caso, dado además su carácter hipotético, puede ser obtenida por la vía que se inició".

Opone la defensa del Estado que el recurso no hace más que reproducir lo alegado en la instancia lo que sería suficiente para su no admisión. Por

otra parte discute la valoración de la prueba practicada por la Sala de instancia, y así resalta lo que afirma la sentencia cuando asegura "La aplicación de la anterior regulación, y de la jurisprudencia que la interpreta, determina la desestimación de la demanda, ya que no se aprecia la existencia de anomalía alguna en el funcionamiento del Juzgado de Instrucción de Valencia".

CUARTO.- El motivo no puede prosperar. Es evidente que como recuerda la defensa del Estado las alegaciones que contiene el motivo se limitan a reproducir cuanto expuso la demanda en la instancia que esta Sala ha tenido a la vista, sin que realidad se combatan los argumentos de la sentencia que se recurre, y, es claro, como también afirma el escrito de oposición, que esa circunstancia sería suficiente para rechazar el motivo, porque la razón de ser de la casación no es otra sino la de combatir las razones de la sentencia objeto del recurso para de ese modo depurar la interpretación del ordenamiento jurídico. Nada de eso acontece en este supuesto.

Pero es que, además, el examen de la sentencia no hace más que reafirmar lo que en la misma se expresa. El *Auto de 11 de octubre de 2001 del Juzgado de Instrucción de Valencia, número 13, pronunciado en las Diligencias Previas núm. 14/01* no se basa, como se repite reiteradamente, en la personalidad querulante de la querellante sino que a lo largo de sus ocho razonamientos jurídicos se justifica suficientemente la razón de la no admisión de la querella fundada en derecho. No es una resolución arbitraria o que no dé respuesta a los argumentos utilizados por quién planteó la querella sino que por el contrario satisface sobradamente el derecho a la tutela judicial efectiva demandada con una resolución clara y suficientemente fundada y que examina cuantas circunstancias y razones expuso quien la interpuso. De ese modo el Auto que origina todas las actuaciones posteriores se extiende en la contemplación de los distintos tipos penales que se mencionan y en el fundamento cuarto se refiere los hechos imputados en la querella, y razona el porqué no hubo resolución injusta a sabiendas; y el siguiente fundamento insiste en esa línea, y va desgranando las distintas reclamaciones que la querellante planteó ante las distintas jurisdicciones, para en un inciso de ese fundamento quinto hacer mención a un informe de médico forense en el que se afirma que la querellante "tiene una personalidad con leve tendencia a la paranoia dentro de los límites normales pero que determina una personalidad "querulante".

Y sobre esa cuestión ese mismo fundamento contiene unas afirmaciones de quien dicta el Auto que apoyan ese aserto, pero que no son una invención sino la muestra patente a juicio de quien resuelve, en relación con ese rasgo de la personalidad de la persona que interpuso la querella, expresión que ni atenta a la dignidad ni a la intimidad de la querellante sino que constata el recorrido que ante los tribunales generó una declaración administrativa de minusvalía que no satisfizo las expectativas de aquella a quien se le otorgó. Y lo mismo hizo el Auto en relación con los demás querellados, cuyas circunstancias fue examinando y razonando porqué no habían incurrido en conductas que fueran reprochables penalmente. Y concluyó el procedimiento no admitiendo a trámite la querella de acuerdo con lo dispuesto en el *artículo 789.5.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal* avigente en el momento en que se tramitó el procedimiento. Esta decisión como también conocemos, fue objeto de cuantos recursos estaban previstos en las normas vigentes, hasta ser rechazado por decisión del Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante el mismo.

Y lo mismo ocurre con la sentencia aquí recurrida que razonó

suficientemente la inexistencia de cualquier funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Ello nos lleva como no podía ser de otra manera a la desestimación del motivo y del recurso.

QUINTO.- Al desestimarse el recurso de conformidad con lo prevenido por el *Art. 139.2 de la Ley de la Jurisdicción* procede hacer expresa condena en costas a la recurrente, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que le otorga el *núm. 3 del artículo* citado señala como cifra máxima que en concepto de honorarios de abogado podrá hacerse constar en la tasación de costas la suma de mil euros. (1.000 €).

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD

EL REY

Y POR LA POTESTAD QUE NOS CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

Fallo

No ha lugar al recurso de casación *núm. 5829/2006*, interpuesto por la representación procesal de *D.ª Angustias*, frente a *la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de quince de septiembre de dos mil seis, pronunciada en el recurso contencioso administrativo número 162/2005*, y que desestimó el mismo deducido contra la desestimación por silencio de la reclamación de responsabilidad patrimonial planteada el 1 de septiembre de 2004 por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, que confirmamos, y todo ello con expresa condena en costas a la recurrente con el límite fijado en el fundamento de Derecho quinto de esta Sentencia.